

ILMA SRA.

MARINA SENDER CONTELL, Arquitecta, presidenta del **COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA**, con domicilio a efectos de notificaciones en C/. Hernán Cortés núm. 6 de València, actuando en nombre y representación de la expresada Corporación, comparece y **DICE**:

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación Servicio de Redacción de proyecto pliego cláusulas administrativas para **el servicio de asistencia la Intervención municipal para la comprobación de las actuaciones necesarias del contrato de obra del CEIP Dr. Corachán**, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público del pasado 26 de julio de 2024 (Expte. 8428/2024) y dentro del plazo legal que se concede, formulamos el presente **RECURSO REPOSICION** en base a los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERA-. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y ESTATUTARIOS DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS.

La legitimación de los Colegios Profesionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses legítimos, colectivos y los profesionales de sus colegiados está expresamente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y en particular en la normativa de colegios profesionales.

La propia Ley de Colegios Profesionales 13 de febrero de 1974 entre las funciones que enumera de los Colegios Profesionales en el artículo 5.g), atribuye a los mismos: "ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte, **en cuanto litigios afecten a los servicios profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, del artículo 1 de esta Ley**". El artículo 9.1 a de la misma Ley atribuye estas funciones a los Consejos Superiores o Generales de los Colegios profesionales "en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional".

Las diferentes leyes autonómicas de Colegios Profesionales contemplan la atribución a los mismos de estas funciones.

Ha de destacarse que esta atribución legal de poder intervenir "en cuanto a litigios afecten a los intereses profesionales" se configura en términos amplios, es decir siempre que haya una "afectación" a los mismos que tienen un fundamento esencial que se expresa en el mismo artículo 5.g de la Ley de Colegios Profesionales, en la circunstancia de que estas Corporaciones de Derecho Público ostentan en su ámbito propio de actuación "la representación y defensa de la profesión". Por tanto, la legitimación de los Colegios Profesionales es una atribución legal esencial para el cumplimiento de sus fines propios y se proyecta en una doble dimensión: la defensa de los intereses de los profesionales; y de la profesión en su conjunto es decir del interés general o colectivo de la profesión ante los poderes públicos.

En el ámbito concreto de la regulación estatutaria de los Colegios de Arquitectos, cabe mencionar el artículo 6.2 de los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior, aprobados por RD 129/2018, de 16 de marzo, que atribuyen al Consejo Superior la función de "representar y defender unitariamente a la profesión" y el artículo 51.1.a), que dispone que entre sus funciones está la de "representar unitariamente la profesión de arquitecto, procurando los intereses profesionales". Y en general, tienen entre sus funciones todas aquellas que "revistan interés común y general para la profesión" (artículo 51.5 de los referidos Estatutos Generales). Y en cuanto a los Colegios de Arquitectos el artículo 3.d, les atribuye entre sus fines "...defender los intereses generales de la profesión, en particular en su relación con los poderes públicos". Y en la misma línea el artículo 7.2 a y b disponiendo este apartado entre las funciones de los Colegios de Arquitectos la de: "Actuar ante los Jueces y Tribunales, dentro y fuera de su ámbito territorial, tanto en nombre propio y en defensa de los intereses de la profesión y de los profesionales de sus miembros, como en nombre, por cuenta y en sustitución procesal de éstos, en la defensa que ellos mismos voluntariamente les encomienden".

III.- Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la legitimación de los Colegios profesionales.

El Tribunal Constitucional tiene elaborada una completa doctrina sobre la legitimación de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho público y titulares del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto están facultados para intervenir y recurrir resoluciones y actos administrativos en defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos y los profesionales de sus colegiados.

Esta doctrina constitucional tiene destacada importancia para el objeto de este informe, especialmente en **dos sentencias del TC, las sentencias 38/2010 de 19 Jul. 2010, Rec. 10094/2006 y 67/2010 de 18 Oct. 2010, Rec. 8750/2006**. Ambas sentencias estimaron sendos recursos de amparo interpuestos por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) contra sentencias que habían inadmitido por falta de legitimación los recursos interpuestos contra procedimientos en materia de contratación pública. En la primera de las sentencias citadas el motivo del recurso se centraba en que la convocatoria del concurso no se había publicado en los medios oficiales legalmente establecidos y en la segunda de las sentencias citadas la cuestión se refería a que la convocatoria era de proyecto y ejecución de obra por lo que se privaba a los colegiados de acceder a la fase de redacción del proyecto.

Los aspectos más destacados de esta doctrina constitucional se pueden sintetizar en las siguientes consideraciones, en la sentencia del 19 de julio de 2010 se dice:

"El examen de la queja planteada debe partir del presupuesto de que este Tribunal ya ha reconocido a los colegios profesionales, en tanto que corporaciones de Derecho público, la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso (STC 45/2004, de 23 de marzo, FJ 3)...".

*"Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen las decisiones que deniegan el acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa, más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente. **Dicho control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión, sino como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por***

cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulte desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y los intereses que sacrifican (SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 45/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3; 119/2008, de 13 de octubre, FJ 4; 184/2008, de 22 de diciembre, FJ 3; 28/2009, de 26 de enero, FJ 2; 183/2009, de 7 de septiembre, FJ 3)".

La misma sentencia del TC precisa que se entiende por interés legítimo al decir que:

"...Se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Dicho de otro modo, se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta..."

Y la sentencia del TC deja muy claro que el COAM estaba legitimado plenamente teniendo en cuenta:

"...la indiscutible competencia de los arquitectos para intervenir en la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de la convocatoria, es evidente, como el Ministerio Fiscal pone de manifiesto en su escrito de alegaciones, que la pretensión ejercitada por el colegio profesional en el recurso contencioso-administrativo, esto es, que se procediese a la publicación de la convocatoria del concurso en los medios oficiales legalmente establecidos, puede subsumirse tanto en el ámbito de la representación y defensa del interés general o colectivo de la profesión misma, como en el ámbito de la defensa de los intereses de los profesionales colegiados, pues mediante la publicidad pretendida se perseguía en defensa de los intereses de la profesión la libre concurrencia en términos de igualdad en un proceso de licitación de indudable competencia de los arquitectos, a la vez que, en defensa de los intereses de sus colegiados, se quería que éstos a través de los medios legalmente establecidos pudieran tener conocimiento de la convocatoria llevada a cabo y evitar que vieran cercenadas sus posibilidades de participación como consecuencia de una indebida publicidad del concurso, lo que para ellos suponía una indudable y concreta ventaja o utilidad, estrechamente conectada con el fin del colegio de defender los intereses profesionales de sus colegiados..."

Reitera la anterior doctrina la segunda de las sentencias dictadas del TC de 18 de octubre de 2010 mencionando la Ley de Colegios Profesionales y el artículo 19 de la LJCA que atribuye la legitimación en el orden jurisdiccional contencioso -administrativo a las corporaciones de derecho público que "estén legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

La sentencia del TC hace una precisión importante al distinguir entre las funciones propias de los Colegios Profesionales, las que se refieren a la defensa de la profesión y las de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Así se dice:

"De la anterior normativa se desprende que, entre las funciones propias de los colegios profesionales, se encuentra la representación y defensa de la profesión, función diferenciada de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Y, como afirmamos en la STC 45/2004, FJ 5, mientras que para la defensa de los intereses de los profesionales colegiados pueden concurrir tanto los colegios profesionales como los propios colegiados cuando resulten individualmente afectados, así como otras personas jurídicas, tales como sindicatos y asociaciones profesionales, por el contrario, cuando se trata de la representación y defensa de la profesión

misma, esto es, del interés general o colectivo de la profesión, esa función representativa y de defensa ante los poderes públicos se ejerce por los colegios profesionales, bajo la nota de exclusividad o monopolio”.

En cuanto al recurso la sentencia entendió que no procedía negar la legitimación al COAM, ya que por parte del mismo:

“..se reivindica ininterrumpidamente la defensa de los principios de igualdad y libre concurrencia a los concursos públicos, es evidente que se trata de la defensa de principios que interesan no sólo a sus colegiados, sino a la totalidad de la profesión de arquitecto, sin que la repercusión de dicha defensa en la generalidad del colectivo profesional pueda identificarse, como pretende la Universidad convocante, con una legitimación abstracta y falta de vínculo con el objeto del recurso Contencioso-Administrativo.

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que el COAM ejerció su acción ante la jurisdicción ordinaria frente a la propia concepción de la convocatoria en su modalidad, excepcional, de contratación conjunta del art. 125 LCAP, basándose en el menoscabo que, en las posibilidades de concurrir, sufrirían a su juicio todos aquellos profesionales que, capaces de llevar a cabo la redacción del proyecto, no reunieran sin embargo los requisitos exigidos para poder ejecutar el mismo, por ser ajenos a las empresas constructoras con capacidad para ejecutar unas obras de tal magnitud”.

IV.- La legitimación en el ámbito de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) y en concreto para la interposición del recurso especial.

La LCSP regula el recurso especial en materia de contratación pública en los artículos 44 a 60. El recurso se configura como un recurso de carácter especial y potestativo en unos supuestos concretos que enumera el artículo 44 de la Ley y cuya resolución corresponde en el ámbito del sector público estatal al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC),

A los efectos que aquí nos atañen, el artículo 48 de la LCSP contiene una disposición específica sobre la legitimación activa para interponer el recurso especial, y que en gran medida sirve de referencia normativa para la interposición de recursos en el ámbito de la contratación pública. en el caso de no incluir a las empresas de nueva creación, se afecta directamente a los derechos de todos aquellos colegiados que ve perjudicado sus derechos al acceso a este concurso, cuando la ley en su artículo 90.4 considera que pueden acceder sin la acreditación de la solvencia técnica prevista en el artículo 90.1 de la LCSP.

El párrafo primero del artículo 48 de la LCSP dispone:

“Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.

Del tenor literal del precepto se desprende, como se ha destacado por la doctrina y la jurisprudencia, que se produce una ampliación considerable de la legitimación para recurrir y en particular para las personas jurídicas, entre las que se encuentran las corporaciones profesionales. Esta ampliación de la legitimación está en consonancia con el ámbito de aplicación del recurso especial que ahora abarca en su objeto a más actuaciones y entre ellas específicamente los anuncios de licitación y los pliegos.

Así, conforme al artículo 46 de la LCSP, las personas jurídicas pueden interponer dicho recurso cuando no solo los derechos e intereses legítimos individuales resulten afectados, sino también los **"colectivos"** que en nuestro caso tiene un especial transcendencia por cuanto conforme a la doctrina constitucional antes expuesta, los Colegios Profesionales pueden interponer recursos cuando resulten afectados los intereses individuales de los colegiados y cuando actúen en defensa del interés colectivo de la profesión. Por ello el artículo 48 de la LCSP ha recogido la doctrina constitucional mencionada.

Y el segundo elemento que contiene dicho precepto legal y que supone una ampliación de la legitimación para recurrir atañe el núcleo esencial de lo que se entiende por interés legítimo. Así concurrirá legitimación cuando esos intereses legítimos individuales o colectivos **"se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso"**. Es decir, una persona jurídica estará legitimada no solo cuando haya un perjuicio directo a dichos intereses legítimos sino también cuando haya una afectación que puede ser directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso.

Por tanto, en el concepto de legitimación para la interposición de recursos en materia de contratación pública, la evolución jurisprudencial y normativa ha consistido en mantener una interpretación amplia, con especial incidencia para las personas jurídicas en la defensa de los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos, lo que se proyecta en la actuación de los Colegios Profesionales que legal y estatutariamente están facultados para intervenir en los procedimientos que afecten a los profesionales y a la profesión.

En la contratación pública, ello se traduce en la legitimación de los Colegios Profesionales para recurrir los pliegos de aquellas licitaciones que, en las condiciones de acceso, de participación, de garantías del procedimiento y criterios de adjudicación, entre otros aspectos resulten lesivos para dichos intereses legítimos individuales y colectivos. **Siempre que exista una afectación, aunque sea indirecta para tales derechos e intereses, habrá que entender que existe interés legítimo y por tanto legitimación.**

V.- La doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sobre la legitimación de los colegios profesionales: su evolución y las últimas resoluciones con una interpretación restrictiva.

Sobre la legitimación activa de los colegios profesionales para interponer recursos contra actos y resoluciones en el ámbito de la contratación pública existe una abundante doctrina del TACRC que se fundamenta en admitir dicha legitimación siempre y cuando resulten afectados por dichos actos y disposiciones impugnados los intereses profesionales, afectación que se concreta en que incida en el ejercicio profesional.

(resoluciones, entre otras muchas 617/2021 de 29 de mayo, 521/2022 de 6 de mayo, 1089/2022 de 21 de septiembre y 1378/2022 de 15 de diciembre).

Esta formulación del TACRC reconoce la legitimación activa de los Colegios Profesionales, acorde con la doctrina constitucional, emitiéndose resoluciones, en concreto sobre el procedimiento aplicable, condiciones de solvencia y criterios de adjudicación, entre otras cuestiones y sin fijar criterios limitativos, reconociéndose la legitimación siempre que se produzca esa afectación de los intereses profesionales.

Así cabe mencionar entre estas resoluciones:

- **Resolución 743/2019 en la que precisamente se impugnaba por el Consejo Superior de los Arquitectos de España la no aplicación del concurso de proyectos en una licitación de AENA.** Dice la resolución:

"La recurrente ostenta la legitimación exigida conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP y el artículo 24.1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tal y como ha reconocido este Tribunal (Recurso nº 1100/2018 Resolución nº 1124/2018 de fecha 7 de diciembre de 2018.) a partir de la interpretación amplia que el Tribunal Constitucional ha deparado en relación con el concepto de legitimación activa (Sentencias núm. 119/2008, de 13 octubre y número 38/2010, de 19 de junio)".

- En el mismo sentido **la resolución del TACRC de 4 de julio de 2019 (resolución 742/2019)**, en la que también era parte recurrente el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya y en la que, al igual que sucede en este recurso, se dirimía la aplicación del concurso de proyectos y se reconoció la plena legitimación del Colegio recurrente, reiterándose los fundamentos contenidos en la resolución antes citada.
- **Resolución del TACRC 1300/2021 de 29 de septiembre** que resolvió un recurso de Tecniberia contra una licitación que establecía subasta electrónica, lo que determinaba la nulidad ya que está excluida en la adjudicación de prestaciones intelectuales como son los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. Se reconoció la legitimación por cuanto la estimación del recurso afectan a los intereses colectivos de los asociados "a lo que puede interesar una restricción del uso de un medio novedoso que implica cargas para el administrado y que, en definitiva, quiere favorecer la baja de la oferta, lo cual sin duda no es de interés del contratista.
- **Resolución 1710/2021 de 25 de noviembre** en la que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (CGOAT) interpusieron recurso especial contra una licitación de SEGIPSA que exigía una habilitación profesional de homologación en una sociedad de tasación, como criterio de solvencia para realizar determinadas tasaciones.

Finalmente, y en apoyo de todo lo manifestado hasta este momento, y por si existiesen dudas sobre la legitimación activa que tienen todos los colegios profesionales para interponer recursos contra los pliegos de los contratos públicos, la reciente sentencia del **Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo sección 3ª número 317 de 2024, de 27 de febrero**, zanja definitivamente esta cuestión, en su fundamentación jurídica:

“TERCERO. - La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse con el objeto de la formación de jurisprudencia, tal como se expone en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 3 de febrero de 2022, consiste en determinar: si los Colegios Profesionales tienen legitimación para impugnar los pliegos de contratos administrativos, cuando las actuaciones a contratar corresponden a su sector profesional.

Delimitada, en estos estrictos términos, la controversia casacional, esta Sala considera que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, al confirmar la falta de legitimación activa del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para impugnar la licitación pública referida a los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas convocada por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía para la redacción del Proyecto básico y ejecución de nuevo edificio administrativo para oficina comarcal agraria de Las Marismas en el municipio de Lebrija (Sevilla), en cuanto mantenemos que, por su rigorismo y formalismo excesivo, vulnera el derecho de acceso a un Tribunal que garantiza el artículo 24 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues no tiene en cuenta que la Corporación recurrente ostentaba un interés legítimo para recurrir dicha actuación administrativa, al afectar directamente a los intereses de la profesión, cuya defensa jurídica tiene encomendada, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales.

En efecto, partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en las sentencias 45/2004 de 23 de marzo de 2004 y 67/2010 de 18 de octubre de 2010, así como de la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en las sentencias de 13 de noviembre de 2007 (RC 8719/2004) y 30 de junio de 2015 (RCA 352/2014), cabe sostener que, en el supuesto que enjuiciamos, constatamos que existe una conexión o vínculo unívoco entre las funciones que tiene atribuida la Corporación recurrente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 5 g) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y del artículo 18 de la Ley del Parlamento de Andalucía, 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la fundamentación jurídica de las pretensiones deducidas en el proceso, que conciernen al interés concreto y específico de preservar la calidad técnica de la intervención de los arquitectos en la redacción de proyectos de construcción de edificios, que afecta, por tanto, a los intereses colectivos de la profesión, por lo que no apreciamos que el Consejo recurrente entable la acción jurisdiccional con base a una abstracta y genérica defensa de la legalidad, que, a juicio del Tribunal de instancia, supondrá el reconocimiento de la acción popular en materia de contratación administrativa.

Se elude en esta interpretación del Tribunal de instancia que, entre las funciones que corresponden a los Colegios Profesionales, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, les compete el ejercicio de cuantas acciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de colectivo de sus colegiados (entre lo que cabe engarzar, en este caso, el derecho de los profesionales integrados en el ámbito corporativo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos a una buena y transparente administración de las licitaciones públicas que interesan a los profesionales de este sector), y que se proyecta en el reconocimiento del derecho corporativo «a ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales», según reza el apartado g) del citado precepto, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1.3 del referido texto legal, que enuncia los fines esenciales de las Corporaciones Profesionales en defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los usuarios de los servicios que prestan sus colegiados, lo que determina que, en este supuesto, en que están en juego la calidad técnica de los servicios profesionales prestados por los Arquitectos, resulte desproporcionado el pronunciamiento de confirmar el fallo de inadmisión del recurso contencioso-administrativo.

CUARTO. - Sobre la fijación de doctrina jurisprudencial en relación con la interpretación del artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en relación con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala, dando respuesta a las cuestiones planteadas en este recurso de casación, que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia declara que:

El artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en relación con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el artículo 19.1 de la Ley 29/998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe interpretarse, a la luz del derecho de acceso a un Tribunal, que constituye una de las garantías nucleares del Estado de Derecho, y que se garantiza en el artículo 24.1 de la Constitución Española y en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que los Colegios Profesionales gozan de legitimación ad procesum para entablar acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el objeto de pretender la anulación de resoluciones de convocatoria de licitaciones sometidas a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, referidas a la prestación de servicios profesionales, en los supuestos que la actuación administrativa afecte a los intereses profesionales de los colegiados, y cuando la acción procesal repercuta directamente o redunde en beneficio del interés colectivo del propio sector profesional, al entablarse con la finalidad de la protección de intereses colectivos o generales, vinculados a la protección de la ética, la transparencia y responsabilidad en el desempeño de la profesión, así como cuando traten de evitar un perjuicio o un menoscabo cierto y efectivo al recto ejercicio de la profesión.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar haber lugar al recurso casación interpuesto por la representación procesal del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 24 de septiembre de 2020, recaída en el recurso de apelación 262/2020, que casamos.”

Y es evidente, que el colegio arquitectos, debe de velar porque los honorarios de sus colegiados sean los ajustados y dignos a los encargos que se les formulen.

SEGUNDO. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO: INADECUADA/FALTA DE MOTIVACIÓN EN SU CLACULO.

El presupuesto de licitación para este contrato es absolutamente desproporcionado por su bajo precio y arbitrario. Como bien he sabido, la arbitrariedad y la actuación de la administración sin una motivación, desembocan en la nulidad de los actos.

En el presente caso, la citada desproporcionalidad, arbitrariedad y falta de motivación, vienen determinadas por el objeto mismo del contrato, que bajo la apariencia de una asistencia técnica al Ayuntamiento, se convierte que en una verdadera dirección de obra, dada las exigencias que se le requiere a los técnicos.

La descripción de los trabajos es la siguiente:

"El contrato contempla la prestación de los siguientes servicios:

2.1.- Control continuo de las obras, asegurando la calidad de las mismas.

2.2.- Redacción de actas de visita a las obras.

2.3.- Comprobación de la ejecución de las obras, con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones debidamente autorizadas por el órgano de contratación del Ayuntamiento de Chiva.

2.5.- Comprobación del cumplimiento del plan de obra y del plazo de ejecución, así como justificación en los retrasos de la ejecución. Se deberá comprobar el cumplimiento económico del proyecto.

2.6.- Redactar, si fuera necesario, aquellos informes sobre la marcha de las obras, o complementarios sobre los aspectos que le sean requeridos por el departamento de Intervención o Urbanismo del Ayuntamiento de Chiva.

2.7.- Estudio de las propuestas de modificación o incidencias que se puedan plantear en el normal desarrollo de la ejecución de la obra.

2.8.- Verificación de la toda la documentación técnica necesaria, en su caso, para poder realizar el acto de recepción, así como el cierre económico y liquidación de la obra.

2.9.- Asistir a la intervención del Ayuntamiento de Chiva, al acto de recepción de las obras, formulando expresamente, manifestación de haberse ejecutado la obra o servicio conforme a las condiciones generales y particulares previamente establecidas."

Y a todo ello debemos añadir la responsabilidad que se van a adquirir, consecuencia de los citados trabajos, que van más allá de una simple inspección, ya que en los pliegos de condiciones en momento alguno se exime a éstos de responsabilidad civil.

Las obligaciones que se le exigen en el punto tercero del citado artículo 12, como es tener la titulación adecuada, se cumple.

La exigencia del pliego recogida en el apartado 2.1 *control continuo de las obras asegurando la calidad de las mismas*, es lo que el citado artículo 12.3 de la LOE, recoge en el apartado b, c, d, e y f.

Artículo 12. El director de obra.

1. *El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.*

2. *Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.*

3. *Son obligaciones del director de obra:*

a) *Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.*

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.

b) *Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.*

c) *Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.*

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13.

Tanto, que el precio no se ajuste al objeto del encargo, contravienen la LCSP, en los siguientes artículos:

"Artículo 100. Presupuesto base de licitación.

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación."

"Artículo 101. Valor estimado.

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo, deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato."

7. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera

un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato”

En este concurso se pide un equipo que constituya una DF paralela como apoyo técnico al ayuntamiento, y de hecho la solvencia técnica que piden es un perfil profesional elevado en experiencia con obras de PEM superior a 4 MM de euros. Un perfil así no puede valorarse como lo han hecho, aplicando el coste por hora del convenio de oficinas técnicas, que les da un precio de contrato de 21000 € aprox. Entendemos, que el precio ofertado debería acercarse a los honorarios de la DF, que con un PEM superior a 8 MM € será muchísimo más elevado.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITAMOS, que tenga por interpuesto el presente recurso de reposición y acuerde modificar el precio del contrato a una cuantía que se aproxime al de la dirección de obra por los motivos expuestos.

En València, a 31 de julio de 2024



Marina Sender Contell.
Presidenta del CTAV.

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIVA